

LA VIOLENCIA Y SUS MUTACIONES

Víctor Meza

En los últimos tiempos, ante el auge innegable de la violencia, ha surgido en nuestro país un interés renovado por el estudio y análisis a fondo de este fenómeno social. Qué bueno que así sea. En la década de los años ochenta, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) publicó algunos de los estudios iniciales sobre este tema.

La aplicación entonces de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, con la asesoría debida de militares argentinos y la participación directa de antiguos guardias nacionales nicaragüenses, coordinada por la cúpula castrense criolla, produjo una ola de violencia singular y desmedida que, de alguna manera, paralizó a gran parte de la sociedad hondureña y la sumió en una especie de parálisis colectiva y miedo desmovilizador. Era la violencia política, articulada desde el Estado, en contra de una parte sustantiva de la sociedad. Lo que algunos llamaron “el terrorismo de Estado”.

Posteriormente, esta violencia primaria y desbordada, alimentada con prejuicios ideológicos y razonamientos fundamentalistas, fue evolucionando hacia nuevas formas de manifestación cotidiana. La delincuencia común fue adquiriendo, poco a poco, nuevas dimensiones en términos de cantidad y calidad operativa. El surgimiento y consolidación de las pandillas, reconvertidas de pronto en tribus urbanas organizadas y terriblemente violentas y agresivas, se sumó al auge inesperado del crimen organizado, especialmente en su variante de redes del narcotráfico. La crispación violenta del clima social se fue convirtiendo en una categoría cotidiana de la vida nacional.

La sociedad hondureña, que no acababa de reponerse de la ola de violencia desatada desde el Estado por razones políticas e ideológicas, terminó sumida en un clima de “nueva” violencia, esta vez desencadenada desde su misma esencia, surgida en medio de las condiciones materiales de vida de la propia ciudadanía. A la “violencia política” (que no acaba nunca de extinguirse, por desgracia), le sobrevino la “violencia social”, esa oleada de criminalidad común y organizada que hoy por hoy nos tiene sumidos a todos en un agujero negro de angustia y espanto colectivos.

Esta simbiosis siniestra, entre la violencia que viene del Estado y la violencia que se incuba y desarrolla dentro de la sociedad misma, violencia política y violencia social, es, entre otras causas, la consecuencia inevitable del abandono, por parte del Estado, de una de sus funciones esenciales: garantizar la seguridad y el orden públicos necesarios para una sana convivencia social. La seguridad pública es, entre otras cosas, el espacio indispensable para el ejercicio de la libertad, de los derechos y prerrogativas inherentes a una sociedad democrática y a un Estado de derecho. Si el Estado no es capaz de asegurar la vigencia de esos espacios de libertad, el Estado no sirve, porque no cumple sus funciones básicas. Así de simple.

La crisis del Estado es, de alguna manera, también la crisis de la sociedad. Actualmente nos encontramos frente a un Estado que reacciona de manera errática y con base a una lógica caótica frente al fenómeno de la violencia. Responde de manera puntual, adopta medidas concretas para

situaciones específicas, reacciona ante las crisis, pero no las previene, ni las anticipa Y, por lo tanto, sufre también un déficit de habilidad para la adecuada resolución de los mismos. Carece de capacidad de vaticinio científico de los conflictos. No puede prevenir las crisis ni buscarles la mejor y más viable solución negociada. Es la impotencia del Estado frente a la violencia de la sociedad.

Recuerdo que en una ocasión, discutiendo los problemas del país con uno de los presidentes que ha tenido la República en el proceso de transición hacia la democracia, le mostré los cuadros estadísticos sobre la evolución reciente de la conflictividad social en el país (entre 300 y 350 conflictos por año, 52 % de los cuales se originaban por el mal manejo de los recursos naturales). De pronto, casi sin avisar, entró uno de los ministros más cercanos al mandatario. La reacción del presidente fue inmediata: escondió los cuadros y recibió a su ministro en mi presencia, no sin antes, en tono de burla, hacer referencia a la mala costumbre de no anunciar la visita. Pero, al margen de la cortesía y el protocolo, lo importante aquí es la valoración de la información. Estábamos analizando datos valiosos que podían servir para un manejo político democrático, y por lo tanto adecuado, de la conflictividad social. Lejos de ser confidencial y secreta, esa información debería ser pública y conocida por los ministros llamados a tomar decisiones en asuntos tan candentes. Pero no, la llamada "cultura del secreto" prevaleció en la mente del gobernante y, por lo mismo, prefirió ocultar información que debió compartir y discutir colectivamente. No sabía que esos cuadros estadísticos estaban ya publicados en la página electrónica del Centro de investigación que los había producido y que, además, yo personalmente dirigía. Así es nuestro país.